

IIª SESIÓN ORDINARIA, EL 13 DE JULIO DE 1903

PRESIDENCIA DEL SEÑOR BENITO VILLANUEVA

SUMARIO: —Asuntos entrados.—Aprobación sobre tablas del dictamen de la comisión de presupuesto en el proyecto de ley exonerando de derechos de aduana la introducción de maquinarias para el alumbrado eléctrico de la ciudad de Catamarca.—Proyecto del señor diputado Olivera declarando necesaria la reforma de la constitución.—Se acuerda licencia para faltar á diez sesiones al señor diputado Argañaraz.—Integración de la comisión de hacienda.—Consideración del dictamen de la comisión de legislación en el proyecto de ley de montepío civil.

DIPUTADOS PRESENTES

Acuña, Aldao, Alfonso, Amenedo, Argerich, Astrada, Balestra, del Barco, Barraquero, Barraza, Barrotaveña, Bollini, Bustamante, Campos, Capdevila, Carbó, Carlós, Carreño, Castellanos, Castro, Centeno, Cernadas, Comaleras, Cordero, Coronado, Cortínez, Demaria, Echegaray, Fonrouge, Fonseca, Gigena, Gómez, González Bonorino, Gouchon, Helguera, Iriondo, Lacasa, Lacavera, Laferrère, Lagos, Leguizamón (G.), Leguizamón (L.), Loureyro, Loveyra, Lucero, Luna, Luque, Luro, Martínez (J.), Martínez (J. A.), Martínez Rufino, Mujica, Naón, Olivera, Orma, Oroño, Padilla, Parera, Parera Denis, Peña, Pérez (B. E.), Pérez (E. S.), Pinedo, Posse, Rivas, Robert, Roldán, Romero (G. L.), Romero (J.), Salas, Sarmiento, Sastre, Seguí, de la Serna, Soldati, Tissiera, Torino, Torres, Ugarriza, Urquiza, Varela, Varela Ortiz, Villanueva (B.), Villanueva (J.), Vivanco (P.), Vivanco (R. S.)

CON LICENCIA

Argañaraz, Benedit, Palacio, Silva.

CON AVISO

Bertrés, Berrondo, Billordo, Dantas, Domínguez, Gattiano, García, Garzón, Guevara, Martínez (J. E.), Olmos, Ovejero, Quintana, Sivilat Fernández, Uriburu, Vedia, Victorica, Yofre, Zavalla.

SIN AVISO

Avellaneda, Casares, Contte, Ferrari, Rosas.

—En Buenos Aires, á 13 de julio de 1903, reunidos en su sala de sesiones los señores diputados arriba anotados, el señor presidente declara abierta la sesión, á las 3 y 35 p. m.

ACTA

—Se lee y aprueba la de la sesión anterior.

ASUNTOS ENTRADOS

PETICIONES PARTICULARES

—Daniel E. de Solier, como único heredero del contraalmirante Daniel de Solier, pide el pronto despacho de una solicitud sobre reclamo de tierras.—(A la comisión de agricultura).

—M. A. Turner acusa á la suprema corte de justicia nacional y á la cámara federal de la capital del delito de prevaricato. — (A la comisión de investigación judicial).

—La sociedad Fomento provincial de San Juan adhiere al proyecto del señor diputado Cortínez sobre facilidades de pago á los deudores del Banco hipotecario nacional.—(A la comisión de hacienda).

—María Rivadeneira solicita un subsidio para una escuela de ciencias y artes domésticas.—(A la comisión de presupuesto).

—Carmen Quiroga de Alvarez solicita prórroga de la pensión que actualmente goza.—(A la comisión de peticiones).

En vista de que la ley de montepío civil no entraba al debate y considerando injusto que se retuviera una parte del sueldo de los empleados que no van á gozar del montepío, determinó aconsejar á la honorable cámara la sanción del proyecto por el cual se mandaba devolver ese descuento, que era propiedad de los empleados.

El día en que se dió cuenta de ese despacho á la cámara, ésta resolvió avocarse el conocimiento de la ley de montepío y dejar en suspenso ese proyecto hasta tanto se pronuncie la cámara sobre aquél. Si el de montepío civil no fuera sancionado, sería el caso de considerar el que dispone la devolución.

Sobre solicitudes de grupos de empleados, no se ha expedido la comisión; no ha tomado en consideración ninguna especialmente: ha creído más práctico expedirse en la forma en que lo ha hecho.

Sr. Lagos—Voy á insistir en la moción que he hecho.

Creo que no se refiere el señor diputado al caso de los empleados del Rosario.

Sr. Presidente—Debo hacer notar al señor diputado que el encabezamiento del despacho de la comisión de presupuesto dice así: «La comisión de presupuesto ha tomado en consideración las diversas solicitudes presentadas».

Sr. Varela Ortiz—En efecto, señor presidente; pero si la presidencia se apercibiera de que la solicitud de los empleados del Rosario ha llegado á la cámara con posterioridad al despacho de la comisión, se daría cuenta de que no estaba comprendida en él.

Varios señores diputados—Entonces no hay despacho.

Sr. Varela Ortiz—Sobre el caso del Rosario no hay despacho, como no lo hay en especial sobre un asunto determinado, porque la comisión entiende que, sancionado el montepío civil, no será posible devolver á los empleados el descuento realizado. En cambio, sancionado el montepío civil, á estos empleados del Rosario, que han quedado cesantes, se les devolverá por imperio de la misma ley de montepío civil, que ha previsto el caso, lo que á ellos se les hubiere descontado.

Sr. Lagos—Si el señor diputado me garantiza que vamos á tratar esa ley...

Sr. Varela Ortiz—Yo no puedo garantizarle nada.

Sr. Helguera—Hago moción para

que se trate inmediatamente la ley de montepío.

—Aproba la esta moción, se vota y es aprobada.

ORDEN DEL DÍA

MONTEPIO CIVIL

A la honorable cámara de diputados.

La comisión de legislación ha estudiado el proyecto de ley presentado por el señor diputado Gouchon, creando una caja nacional de pensiones; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja en su reemplazo la sanción del proyecto de ley adjunto.

Sala de la comisión, septiembre 12 de 1902.

Federico Pinedo.—Juan José Silva.—A. Mujica.—F. A. Barroetaveña.—C. F. Gómez.—E. Padilla.

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Artículo 1.º Créase una caja nacional de jubilaciones y pensiones para los funcionarios, empleados y agentes civiles de que habla el artículo 2.º

Declarase que los fondos y rentas de esa caja son de propiedad de las personas comprendidas en las disposiciones de la presente ley, y que con ellas se atenderá al pago de las jubilaciones concedidas en virtud de las leyes números 1909, 2219 y 3744 y al de las jubilaciones y pensiones que en lo sucesivo se acuerden en conformidad á la presente.

Art. 2.º Quedan comprendidos en las disposiciones de la presente ley:

- Inciso 1.º Los funcionarios, empleados y agentes civiles que desempeñen cargos permanentes en la administración, cuyas remuneraciones figuren en el presupuesto anual de gastos de la nación.
- 2.º Los directores, empleados y demás personal del consejo nacional de educación á que se refiere la ley número 1909.
- 3.º Los empleados del Banco de la nación y del Banco hipotecario nacional.
- 4.º Los jubilados existentes, á los efectos del capítulo IV.
- 5.º Los magistrados judiciales, ministros de estado y los que desempeñen cargos electivos, que á ella se acojan, siempre que los que pertenezcan á las dos últimas categorías hayan prestado 20 años de los servicios á que se refiere el inciso 1.º de este artículo.

Art. 3.º Esta ley no regirá respecto á las remuneraciones siguientes:

- 1.º Las de las personas expresadas en el inciso 5.º del artículo 2.º cuando no se acojan á la presente.
- 2.º Las de los servicios que sean contratados en virtud de autorizaciones especiales y teniendo en vista la competencia excepcional de las personas, salvo que hubieran contribuido desde su incorporación al servicio á la formación del fondo de la caja con el descuento de que habla el inciso 1.º del artículo 4.º

- 3.º Las de los obreros que trabajan por jornal en las obras públicas ó en talleres industriales del estado, salvo aquellos que presten servicio permanente y contribuyan con el referido descuento.
- 4.º Las del personal de la sociedad de beneficencia de la capital de la República.
- 5.º Las de aquellos que desempeñen comisiones accidentalmente ó por tiempo fijo.

DE LA CAJA NACIONAL

Art. 4.º El fondo de la caja nacional se formará con las siguientes asignaciones:

- 1.º Con el descuento forzoso del 5 por ciento sobre los sueldos de las personas comprendidas en el artículo 2.º
- 2.º Con el importe de la mitad del primer mes de sueldo de la persona que por primera vez entra á la administración.
- 3.º Con la diferencia del primer mes de sueldo cuando alguna de las personas indicadas en el artículo 2.º pase á ocupar un empleo mejor retribuido que el que antes desempeñaba.
- 4.º Con el importe de las multas que en dinero efectivo la administración imponga á su personal ó á los extraños.
- 5.º Con los intereses de los fondos públicos y rentas de otros bienes que la caja adquiriera.
- 6.º Con el importe de los sueldos de los empleos vacantes, salvo que el poder ejecutivo declare por decreto especial que la no provisión obedece á razones de economía.
- 7.º Con las donaciones ó legados que se le hagan.
- 8.º Con la renta de diez millones de pesos en fondos públicos de 6 por ciento de interés con que contribuye el estado.
- 9.º Con el importe del fondo acumulado por el consejo nacional de educación en virtud de las leyes números 1420 y 1909, que pasa á formar parte del tesoro.

Art. 5.º La caja nacional será administrada por una junta compuesta de un presidente administrador, designado por el poder ejecutivo con acuerdo del senado, que durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones y podrá ser reelegido; y de dos vocales, que lo serán el presidente de la contaduría nacional y el presidente del crédito público.

Art. 6.º El presidente administrador de la caja nacional podrá ser removido antes del término fijado, á solicitud de la junta de administración, por mala conducta en el ejercicio de sus funciones, por el poder ejecutivo en acuerdo de ministros.

Art. 7.º Faltando el presidente de la junta, sus funciones serán desempeñadas por el presidente de la contaduría nacional.

Art. 8.º La junta de que habla el artículo 5.º estará especialmente obligada:

- 1.º A velar por la fiel observación de las prescripciones que la presente ley establece para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones.
- 2.º A cuidar que no continúe en el goce de ella ninguna persona que haya perdido el derecho de percibirla.
- 3.º A rendir cuenta trimestral de sus operaciones á la contaduría general de la nación y á publicar cada tres meses el estado correspondiente.
- 4.º A elevar al ministerio de hacienda, al fin de cada ejercicio económico, una me-

moria completa sobre la situación de la caja, señalando los inconvenientes con que se hubiere tropezado y proponiendo las modificaciones de la ley que la práctica demostrara necesarias, especialmente las que se refieran á la proporcionalidad de los recursos que se acumulen con relación á las erogaciones que hubiesen sobrenvenido ó se presuma que deben ocurrir, siempre bajo la base de que los recursos que la presente crea deben por sí solos bastar para llenar sus fines.

5.º A darse un reglamento interno, sometiendo á la aprobación del poder ejecutivo.

Art. 9.º La junta de la caja nacional percibirá los fondos expresados en el artículo 4.º, pagará las jubilaciones y pensiones á que se refiere esta ley, formulará su presupuesto de gastos, que deberá ser aprobado por el poder ejecutivo y atendido con los fondos de la caja; nombrará y removerá el personal á sus órdenes.

Art. 10.º En ningún caso podrá disponerse de parte alguna de los fondos de la caja para otros fines que los mencionados en esta ley, bajo la responsabilidad personal de los directores, que se hará efectiva en sus bienes por disposición del poder ejecutivo ó á solicitud de cualquiera de las personas de que trata el artículo 2.º

Art. 11.º La caja no podrá atesorar suma en dinero efectivo que no requiera para los pagos corrientes y una reserva prudencial con tal objeto. Todos sus depósitos en dinero serán colocados en el Banco de la nación.

Art. 12.º Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, los fondos de la caja serán invertidos por ésta en títulos de la deuda nacional, de manera que le produzcan el mayor interés y la más frecuente capitalización posibles.

Art. 13.º La adquisición ó enagenación de títulos nacionales se hará por llamado á licitación, salvo que la junta por unanimidad resuelva en casos especiales proceder en forma distinta.

Art. 14.º Las cantidades que según el artículo 4.º forman el fondo de la caja nacional, serán retiradas mensualmente por las cajas nacionales que paguen ó liquiden sueldos y entregadas sin demora á la primera.

Art. 15.º Declárase inembargables los bienes de la caja nacional establecidos por la presente ley.

CAPÍTULO II

DE LAS JUBILACIONES

Art. 16.º Los funcionarios, empleados ó agentes civiles de la nación expresados en el artículo 2.º tendrán derecho á jubilación con arreglo á las disposiciones de la presente ley.

Art. 17.º La jubilación es ordinaria ó extraordinaria. La ordinaria equivale al 270 por ciento del último sueldo multiplicado por los años de servicio del que obtenga su jubilación. La extraordinaria equivale al 240 por ciento del último sueldo multiplicado también por los años de servicio del jubilado.

Art. 18.º La jubilación ordinaria se acordará al empleado que haya prestado cuando menos treinta años de servicio y tenga cincuenta y cinco ó más años de edad.

Art. 19.º La jubilación extraordinaria se acordará al empleado que después de cumplir veinte años de servicios fuese declarado, por enfermedades resultantes del ejercicio de las funciones, física ó intelectualmente imposibilitado

para continuar en el ejercicio de su empleo, y al que, cualquiera que fuese el tiempo de servicios prestados, se inutilizase física ó intelectualmente en un acto del servicio y por causa evidente y exclusivamente imputable al mismo.

Art. 20. A los efectos de la jubilación, sólo se computarán los servicios efectivos durante el número de años requerido, que hayan sido prestados sin interrupción, salvo lo dispuesto en el artículo 24.

Las interrupciones del servicio ocurridas antes de la promulgación de esta ley que no hayan excedido de cinco años y que hayan sido causadas por renuncia del empleado, no perjudicarán los derechos acordados por la presente, ni se considerará como interrupción del servicio la que sea originada por enfermedad, servicio militar obligatorio ó fuerza mayor debidamente justificadas. Pero en ningún caso la duración de las interrupciones se considerará como tiempo de servicio prestado.

Art. 21. A los empleados del Banco de la nación ó del hipotecario nacional se les computará los servicios que hayan prestado en el Banco nacional actualmente en liquidación.

Art. 22. Únicamente podrán volver al servicio los que hayan obtenido jubilación ordinaria. En ese caso, el jubilado cesará en el goce de la jubilación y percibirá solamente el sueldo asignado al nuevo empleo. Cuando abandone ésta, volverá al goce de la jubilación sin que pueda tener derecho á que le sea aumentada. Si es llamado á desempeñar funciones públicas accidentales, no podrá cobrar retribución alguna al estado.

Art. 23. No podrá computarse á las personas de que habla la última parte del artículo 19 para determinar el monto de su jubilación extraordinaria un tiempo menor de quince años de servicio.

Art. 24. Los empleados que habiendo sufrido el descuento establecido en el artículo 1.º durante diez años continuos, renunciaran sus puestos, conservarán el derecho de que les sean computados esos años de servicios para acogerse á los beneficios de esta ley, siempre que en sus renunciaciones constara la reserva correspondiente é ingresaren nuevamente á la administración dentro de un plazo de tres años, contados desde la fecha de su aceptación. El tiempo transcurrido fuera de servicio no se les computará.

Art. 25. A los efectos establecidos en los artículos 17 y 28, declarase último sueldo el promedio de sueldo mensual que el interesado hubiera percibido durante los últimos cinco años de servicio.

Para los empleados cuyos emolumentos no sean determinados por el congreso, el último sueldo será el promedio mensual que hubieren percibido durante los últimos diez años del servicio.

Art. 26. No se computarán los servicios prestados antes de la edad de 18 años.

Art. 27. Los empleados despedidos por razones de economía ó por no requerirse sus servicios, y los que cesen por cambio de designación en el orden administrativo, ó las supresiones que se hicieran en los presupuestos anuales ó en leyes especiales, tendrán derecho á reclamar la devolución del 5 por ciento descontado de sus sueldos, con el interés del 5 por ciento capitalizado por año.

Art. 28. Ninguna jubilación podrá exceder del 95 por ciento del último sueldo percibido.

Art. 29. La jubilación deberá solicitarse, so pena de nulidad, ante la junta de administración, quien, después de llenados todos los trá-

mites, la acordará ó nó, elevándola por intermedio del ministerio que corresponda á la aprobación del poder ejecutivo.

Art. 30. Si se solicitase jubilación extraordinaria, la junta de administración, sin perjuicio de las averiguaciones que estime procedentes, se dirigirá al departamento nacional de higiene para que informe sobre las causales alegadas de imposibilidad física ó intelectual.

Art. 31. El derecho acordado por el artículo 18 de esta ley podrá ser ejercido por los maestros de instrucción primaria, las clases y agentes de policía de seguridad y por los jefes, oficiales y tropa del cuerpo de bomberos con veinticinco años continuados de servicio y cincuenta de edad. En este caso la jubilación ordinaria equivaldrá al 3/24 por ciento del último sueldo multiplicado por veinticinco.

Art. 32. No tratándose de funcionarios inamovibles, podrá el poder ejecutivo jubilar de oficio á los que se hallen en las condiciones de los artículos anteriores, cuando así lo exija el buen servicio público. En este caso la resolución será tomada con intervención de la junta de administración, audiencia del interesado y en acuerdo de ministros.

Art. 33. Las fracciones de años para el cómputo de servicios se apreciarán por años enteros si alcanzaren á seis meses. Si fuesen menores no serán computadas.

Art. 34. Las jubilaciones concedidas hasta la promulgación de la presente en virtud de lo dispuesto por las leyes números 1900, 2219 y 3744, serán en lo sucesivo pagadas por la caja nacional con una reducción del 10 por ciento sobre su valor actual.

Art. 35. Cuando un empleado hubiese desempeñado dos ó más empleos en propiedad, al mismo tiempo, la jubilación se acordará sobre el sueldo mayor, sin acumularse el tiempo de los otros ni el sueldo. Exceptuase el caso de los empleos del profesorado, en el cual se acumularán los sueldos á condición de que por lo menos se haya sufrido durante cinco años el descuento del 5 por ciento en los sueldos de todas las cátedras desempeñadas.

Art. 36. Las jubilaciones serán pagadas desde el día en que el interesado deja el servicio.

CAPÍTULO III

DE LA PÉRDIDA DE LA JUBILACIÓN

Art. 37. No tendrán derecho á ser jubilados:

- 1.º El que hubiese sido separado del servicio por mal desempeño de los deberes de su cargo.
- 2.º El que hubiese sido condenado por sentencia judicial por alguno de los delitos clasificados en el código penal, como "pecuniarios á los empleados públicos", y en general por delitos contra la propiedad ó cualquiera otro que merezca pena de penitenciaría ó presidio.
- 3.º El que no solicitase su jubilación dentro de los cinco años siguientes al día en que dejó el servicio.

Art. 38. La jubilación es vitalicia y el derecho á percibirla sólo se pierde por las causas expresadas en el inciso 2.º del artículo anterior.

Art. 39. La conmutación ó el indulto no harán recobrar los derechos perdidos según los artículos 37 y 38, si la pena ha sido impuesta por delito contra la propiedad ó pecuniarios á empleados públicos.

Julio 13 de 1903

CÁMARA DE DIPUTADOS

11.ª sesión ordinaria

Art. 40. No podrá reclamar su jubilación el que tenga causa criminal pendiente contra su persona, siempre que se procese por alguno de los delitos expresados en el inciso 2.º del artículo 37. El interesado deberá promover previamente la terminación definitiva del proceso.

CAPÍTULO IV

DE LAS PENSIONES

Art. 41. En los mismos casos en que, con arreglo a las disposiciones de la presente ley haya derecho a gozar jubilación y ocurra el fallecimiento del empleado ó jubilado, tendrán derecho á pedir pensión en la proporción y condiciones establecidas en el presente capítulo: la viuda, los hijos y en su defecto los padres del causante.

Art. 42. El derecho á gozar de la pensión entre las personas mencionadas corresponderá en el orden siguiente:

- 1.º A la viuda en concurrencia con los hijos;
- 2.º A los hijos solamente;
- 3.º A la viuda en concurrencia con los padres;
- 4.º A la viuda;
- 5.º A los padres.

Los hijos naturales disfrutarán la parte de la pensión á que tengan derecho según las leyes comunes.

Art. 43. El importe de la pensión será de la mitad del valor de la jubilación que se gozaba ó á que se tenía derecho por el causante.

Art. 44. Si la esposa del empleado quedase viuda, hallándose divorciada por su culpa, ó viviendo de hecho separada sin voluntad de unirse, ó provisoriamente separada por su culpa á pedido del marido, no tendrá derecho á pensión; pero las demás personas llamadas á obtenerla por esta ley gozarán de ella como si la viuda no existiera.

Art. 45. Siempre que sean varias las personas llamadas á disfrutar de la pensión, si alguna de ellas pierde su derecho á percibirla, la parte que le corresponde acrece á las demás.

Art. 46. Si á la muerte del causante de una pensión quedan hijos huérfanos de distintos matrimonios, la pensión se dividirá por iguales partes entre todos ellos, entregándose á sus respectivos representantes legales.

Art. 47. Para gozar de la pensión la viuda que no hubiere tenido hijos durante el matrimonio con el causante, deberá justificar que ha estado casada con el empleado jubilado cinco años antes del fallecimiento de éste, salvo el caso que existan hijos legitimados ó que se trate de lo preysto en la última parte del artículo 19. En este caso, bastará que el matrimonio se haya celebrado antes del accidente allí expresado.

Art. 48. El término máximo de duración de las pensiones será de quince años, á contar desde el día del fallecimiento del causante, desde cuya época deberán abonarse.

Art. 49. No se acumularán dos ó más pensiones en la misma persona. Al interesado le corresponde optar por la que le convenga, y hecha la opción quedará extinguido el derecho á las otras.

Art. 50. Toda solicitud de pensión se presentará, ó pena de nulidad, á la junta de administración acompañada de los recaudos necesarios para justificar que el postulante se halla en las condiciones de la ley. Estando la solici-

tud suficientemente instruida, la junta la acordará ó nó y la elevará con informe al poder ejecutivo para su resolución definitiva.

Art. 51. Las personas designadas en el artículo 42 tendrán derecho á que se les liquide el importe de un mes del último sueldo del empleado fallecido sin dejar derecho á pensión, por cada cuatro años que éste hubiera contribuido á la formación del fondo de la caja nacional.

EXTINCIÓN DE LAS PENSIONES

Art. 52. El derecho á pensión se extingue:

- 1.º Para la viuda, desde que contrajere nuevas nupcias;
- 2.º Para los hijos varones, desde que llegasen á la edad de veinte años;
- 3.º Para las hijas solteras, desde que contrajesen matrimonio ó cumplieren treinta años de edad;
- 4.º En general, por vida deshonesta, vagancia, por domiciliarse en país extranjero, ó por haber sido condenado por delito contra la propiedad ó á las penas de presidio ó penitenciaria.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 53. Las pensiones concedidas hasta la fecha de la presente ley seguirán abonándose por la ley de presupuesto general, reducidas en un 10 por ciento de su valor.

Art. 54. Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley número 3195, las cámaras deberán fijar, con el voto de tres cuartas partes del total de los miembros de cada una, el día en que hayan de tratarse las solicitudes ó proyectos sobre pensiones gratiables mayores de cien pesos. Sin este requisito previo, serán nulas las pensiones que se acuerden, y su importe no podrá ser liquidado por la contaduría nacional.

Art. 55. Las jubilaciones y pensiones son inalienables. Será nula toda venta ó cesión que se hiciere en ellas por cualquier causa.

Los jueces sólo podrán decretar el embargo de la cuarta parte de ellas, pero si la pensión correspondiese á varias personas, se embargará sólo la cuarta parte de lo que deba percibir el deudor embargado.

Art. 56. Los comprobantes con que se debe justificar el derecho para optar á jubilación ó pensión, serán los mismos que se requieren por las leyes comunes para la adquisición de derechos.

Art. 57. En el caso de que la junta de la caja nacional no haya acordado una jubilación ó pensión, el poder ejecutivo, oído el procurador de la nación, resolverá el caso en acuerdo de ministros.

Art. 58. No se computarán, á los efectos de esta ley, los servicios prestados en las municipalidades ó en las administraciones de provincia, ni tampoco los desempeñados en el ejército cuando éstos sean retribuidos con retiro militar.

Art. 59. El poder ejecutivo podrá suspender por el tiempo que juzgue necesario la concesión de nuevas jubilaciones y pensiones en el caso de que los recursos de la caja nacional no fuesen suficientes para atenderlas, dando inmediatamente cuenta al congreso y promoviendo la revisión de la presente ley.

Art. 60. Esta ley regirá desde su promulgación, al legislantarla el poder ejecutivo dispondrá lo conveniente para que inmediatamente funcione la caja nacional creada por la presente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 61. El consejo nacional de educación transferirá a la caja nacional de jubilaciones y pensiones el fondo que haya acumulado para los efectos de la ley número 1909.

Art. 62. Las personas indicadas en el inciso 5.º del artículo 2.º, que se acojan a la presente, deberán ingresar a la caja el importe del descuento del 5 por ciento de que habla el artículo 4.º, que les hubiera correspondido efectuar desde el 1.º de enero de 1901.

Art. 63. El poder ejecutivo ordenará que durante el año 1903 se levante un censo de los empleados comprendidos ó que puedan acogerse a los beneficios de la presente ley.

Art. 64. Deróganse todas las leyes y disposiciones que se opongan a la presente.

Art. 65. Comuníquese al poder ejecutivo.

Federico Pinedo.—Juan José Silva.—A. Mujica.—F. A. Barroetaveña.—Carlos F. Gómez.—F. Padilla.

Sr. Presidente — El proyecto de montepío había sido informado en general por el señor diputado Gómez...

Sr. Gómez — Pido la palabra.

La comisión de legislación me ha en cargado que dé por reproducido ante la cámara el informe que produjo el año 1901 á propósito de este proyecto. Nada tendría que repetir sino que él responde cada día más á una aspiración general, no sólo de parte de los empleados sino del estado, por lo que cuanto antes debe ser convertido en ley.

No creo que en estas materias haya una iniciativa de mayor transcendencia por lo que respecta al porvenir de los empleados y á los intereses de la nación. Pienso que si el congreso la sancionara, haría una obra realmente transcendental en la legislación, por los efectos permanentes que está llamada á producir.

No tengo nada más que agregar. Cuando entremos en la discusión en particular, daré los informes que sean solicitados.

—Se vota en general el despacho de la comisión, y resulta afirmativa.

Sr. González Bonorino — Hago moción para que en la discusión en particular se dé por aprobado todo artículo no observado.

Sr. Torino — Yo indicaría que la discusión se hiciera por capítulos. Todos los señores diputados conocen el asunto.

Sr. Lacasa — Mejor sería por artículos.

Sr. Presidente — Hay dos mociones distintas...

Sr. Torino — Yo retiro la mía, des-

de que no satisface á todos los señores diputados.

Sr. González Bonorino — Que se apruebe por artículos indicando el número de cada uno de ellos, y dándose por aprobado el que no sea observado.

Sr. Presidente — ¿Leyendo íntegramente los artículos?

Sr. González Bonorino — Sin dar lectura.

Sr. Presidente — Si no hay oposición, así se hará.

—Se da por aprobado el artículo 1.º

Sr. Varela Ortíz — ¿Me permite, señor presidente?

Sr. Presidente — Tiene la palabra.

Sr. Varela Ortiz — Me parece que este artículo 1.º debe tener alguna referencia á los fondos ya existentes en el Banco de la Nación Argentina con destino á ser la base, diré así, de la caja del montepío civil que la misma ley crea.

Hay allí 3.700.000 pesos más ó menos que provienen de la reducción del cinco por ciento hecha sobre los sueldos asignados en el presupuesto á determinados empleados de la administración. Y digo determinados, porque no se ha aplicado con el rigor que el mismo proyecto de montepío civil determina al referirse á todos los empleados de la administración. La ley de presupuesto dispone desde el año 1901 que se haga este descuento del cinco por ciento sobre los sueldos de la administración, olvidándose que por el proyecto de montepío que estamos tratando se tiene presente una serie de operaciones de carácter administrativo que hubieran aumentado considerablemente ese fondo, y olvidándose también de fijar la manera como el ministerio debía administrarlo, á tal punto, que se ha pasado más de un año y medio con la colocación de ese dinero en tan malas condiciones, que sólo reduitaba el uno por ciento, para recién venir á apercibirse más adelante, de que colocado á seis meses de plazo podía dar el cuatro por ciento de interés, con lo cual la suma actual sería muchísimo mayor, y mucho mayor aún si desde el principio se hubiera convertido esa suma en títulos de deuda interna que redituán el seis por ciento de interés, y que, adquiridos desde 1901 al precio en que se cotizaban, más ó menos, del setenta por ciento, habrían podido producir una muy bue-

na utilidad á la caja, sin contar las ventajas que habría reportado la valorización de esos títulos que hoy se cotizan á más del noventa por ciento.

No hecho así, nos encontramos en una situación diversa, perjudicial para los empleados á quienes se les ha hecho el descuento con relación á otros á quienes no se les ha hecho.

Así, por ejemplo, en el artículo 2.º de la misma ley figuran los empleados del Banco de la nación y del Banco hipotecario nacional como incorporados á los beneficios de la ley de montepío civil. Sobre el sueldo de estos empleados no se ha hecho descuento alguno hasta el día presente, y lo que yo quiero dejar bien aclarado es la situación en que se encuentran aquellos empleados á quienes ya se les ha hecho el descuento durante tres años y los otros á quienes no se les ha descontado nada hasta el momento de la sanción de esta ley, á fin de que no entren á gozar de los beneficios producidos por la parte ya descontada en la misma proporción que los otros.

Si el señor miembro informante me diera una respuesta satisfactoria á esta manifestación que yo hago, eso sólo bastaría como antecedente en el Diario de sesiones, y no propondría entonces ninguna modificación al artículo.

Sr. Gómez—Pido la palabra.

Si no he oído mal, lo que el señor diputado quiere saber es si se mantiene la igualdad para poderse acoger á los beneficios de esta ley para todos los empleados de la administración.

Sr. Varela Ortiz—Sí, señor.

Sr. Gómez—Ese ha sido el propósito de la comisión cuando subscribió este proyecto de ley, á tal punto que en las disposiciones transitorias figura un artículo obligando á los miembros del poder judicial que quieran acogerse á los beneficios de esta ley á ingresar al tesoro de la caja los fondos que hubieran debido depositar desde el 1.º de enero de 1901, con arreglo al descuento del cinco por ciento.

Si han existido, como existen, los empleados de ferrocarriles y del Banco de la nación sin haber sufrido ese descuento, me parece muy justa y atendible la observación del señor diputado.

De manera que yo mismo voy á proponer, cuando se trate de las disposiciones transitorias, que un empleado no podrá gozar de los beneficios de esta ley sin ingresar á la caja las cantida-

des que debieron descontárseles desde la época indicada.

Sr. Varela Ortiz—Y hay otro caso que sería menester salvar, si el señor presidente y el señor diputado me lo permiten.

Es este: la situación en que también se encontraría con relación á los empleados que ya han contribuido durante tres años con el descuento del 5 por ciento á formar la caja y la de aquellos otros que llegasen á ser empleados recién después de la sanción de esta ley. Porque ocurrirá, señor presidente, esto original: un empleado que ha servido al país en diversas situaciones durante veinte años y que no es empleado ahora, pero se sanciona la ley é inmediatamente de sancionada recibe un empleo. Corren dos años y sumando los servicios anteriores con los dos años que lleva de nuevo empleo llega á la época en que puede jubilarse. Ese empleado no ha contribuido con más descuento que el que corre desde dos años atrás sobre su sueldo del último nombramiento.

Me parece que también sería injusto hacerlo beneficiar de estos 3.700.000 pesos que ha contribuido á formar el descuento de un número muy limitado de empleados.

De manera que en mí entender lo mejor sería establecer el principio general: que todo el que sea jubilado dentro de las condiciones de esta ley deberá concurrir con el 5 por ciento del sueldo de que goza desde el 1.º de enero de 1901, en que comenzó á formarse la caja del montepío.

Si el señor diputado quisiera ampliar con este agregado las disposiciones transitorias, como ya ha prometido hacerlo, tampoco ocuparé más la atención de la cámara.

Sr. Gómez—Pido la palabra.

La observación del señor diputado podría tener un fondo de justicia, señor presidente, si esta ley no reconociera como reconoce á todo el personal de la administración los servicios prestados con anterioridad á la misma.

El caso que el señor diputado supone de un empleado que recién se incorpora á la administración, es el caso de los 25 ó 26.000 empleados incorporados á esta ley. Ya lo dije á la cámara cuando informé en general y di el dato que fué realmente revelador y sobre todo que demostró los grandes beneficios de esta ley: los empleados

actuales de la administración tienen como término medio quince años de duración en sus empleos. El fondo que durante ese tiempo se hubiera formado, si se hubiera hecho el descuento del 5 por ciento á todos los sueldos, alcanzaría, según los cálculos que trajo el señor ministro de hacienda y que han ratificado contadores muy competentes, á 37.000.000 de pesos moneda nacional.

De manera que ya en este caso no habría la misma razón que en el anterior.

Ninguno de los empleados actuales puede quejarse; á todos se les hace un verdadero regalo computándoseles los servicios anteriores, al revés de lo que ha pasado en otros países, sin haber sufrido el descuento durante todo el tiempo del servicio.

También me parece que estamos anticipando la discusión, pues se hace referencia á algo que está legislado en el artículo 20, que dice en su primera parte: A los efectos de la jubilación, sólo se computarán los servicios efectivos durante el número de años requeridos, que hayan sido prestados sin interrupción, salvo lo dispuesto en el artículo 24.

De modo que las observaciones del señor diputado tendríamos que considerárlas cuando se trate este artículo.

Sr. Varela Ortiz—No es ese mi caso.

Yo sé que esta ley como todas las leyes de montepío civil, es una ley de favor. Pero lo que yo quiero evitar es que el favor de la ley en favor de uno sea mayor que en favor de otro.

Sé también que el término medio de servicios prestados á la administración por los empleados actuales es de quince años.

También me consta que esos empleados actuales ya han hecho un desembolso de 5 por ciento durante tres años, y que los otros que van á venir, con quince de servicios atrasados, no habrán sufrido ningún descuento.

Sr. Gómez—Tendrán que integrarlo.

Sr. Varela Ortiz—Precisamente: por eso estoy abogando; y para que el favor de la ley sea igual, que todos los que quieran acogerse á sus disposiciones hagan un descuento de 5 por ciento sobre el haber que entran á gozar; calculando desde el 1.º de enero de 1901 y todavía les habremos perdonado los intereses.

Sr. Gómez—Yo simpatizo con todo lo que tienda á hacer mayores las restricciones para conceder jubilaciones, porque creo que esta ley es en exceso generosa. De manera que cuando llegue la oportunidad de las disposiciones transitorias no tendré inconveniente en aceptar lo que propone el señor diputado.

—Se aprueba el artículo 1.º así como el 2.º y el 3.º

—En discusión el artículo 4.º

Sr. Varela (H.)—Pido la palabra.

El inciso 3.º del artículo 4.º me parece que habría que suprimirlo si hubiera de aceptarse la proposición del señor diputado Varela Ortiz, porque si concurrieran con la suma que hubieran devengado desde el 1.º de enero de 1901 hasta la fecha de la sanción del proyecto, creo que no sería justo quitarles la mitad del primer mes de sueldo.

Sr. Varela Ortiz—Mi proposición no se refiere al que se incorpora por primera vez á la administración.

Sr. Presidente—El señor diputado por Buenos Aires insiste en la supresión?

Sr. Varela (H.)—No he dicho nada, señor presidente.

—Se aprueban los artículos 4.º, 5.º, 6.º y 7.º.

—En discusión el artículo 8.º

Sr. Varela Ortiz—Es preferible la sanción á libro cerrado, que sancionar en esta forma el proyecto.

Sr. Presidente—¿El señor diputado propone que se lean los artículos? Se necesita una resolución de la cámara, porque ya resolvió suprimir la lectura.

Sr. Varela Ortiz—Yo no propongo nada desde que la votación de la cámara ya se ha manifestado. Que lo haga el autor de la moción, si quiere.

Sr. González Bonorino—Como yo soy el autor de la moción, propongo que se lean los artículos desde el 8.º inclusive.

—Se vota esta moción y resulta negativa.

—Se dan por aprobados los artículos 8.º al 17 inclusive.

—En discusión el artículo 18.

Sr. Argerich—Pido la palabra.

Cuando este asunto fué despachado por primera vez en el período de 1900 formaba parte de la comisión de legis-

lación y establecí en ella mi voto en disidencia respecto del precepto que con contiene este artículo.

Soy enemigo de toda ley de pensiones y jubilaciones y hasta creo que estas leyes de montepío no dan resultado: se sustituyen en cierto modo á la voluntad del individuo.

Conozco perfectamente bien los daños que todo esto ocasiona al servicio público y no creo en la eficacia de una ley de esta naturaleza.

Sin embargo, y no obstante el criterio que se adopte para fijar el número de años de servicios del empleado, creo que dentro de la injusticia evidente de toda ley de esta naturaleza el legislador sólo puede tener en cuenta el número de años de servicios del empleado.

Este es un país que no tiene ley de ascensos; lo cual abre siempre la puerta á todas las arbitrariedades que dan por resultado la ocupación de los empleos públicos sin seguir el orden de los ascensos.

Yo no creo mucho en una ley de empleos públicos, en una ley de ascensos, tal como la de Alemania, por ejemplo, y no creo en ella porque aquel precepto constitucional que da al presidente de la República de un modo ineludible é inevitable la facultad de nombrar y remover á los empleados de la administración, se opone, diremos así, al ascenso riguroso que estaría en oposición á esa prerrogativa.

De acuerdo con esas doctrinas, creo que la ley debe sólo exigir al empleado un número determinado de años de servicios; que no tiene de ninguna manera por qué limitar el cómputo de los años de servicios efectivos prestados.

Si por razones que ignoro, la comisión cree que en vez de treinta años de servicios debe ponerse treinta y cinco, yo no distaría de acompañarla en esos propósitos. Pero no hay razón ninguna para que no se computen los años efectivos de servicios prestados, en daño de los que empezaron temprano á dedicarse al trabajo y á servir al estado desde jóvenes.

Creo que la reglamentación debe ser exclusivamente aquella que exija un número de años de servicio en los empleados, independientemente de la edad. En ese sentido, estoy en contra de la segunda parte del artículo 18 que exige determinada edad en el empleado público, como oportunamente estaré en contra del precepto contenido en el ar-

tículo 26, que inspirándose en los mismos motivos establece que no se computarán los servicios prestados antes de la edad de diez y ocho años.

¿Por qué razón, señor presidente? ¿Por qué razón se han de computar los años de servicios al que empieza á trabajar después de los diez y ocho años y no se han de computar al que empieza á trabajar en tareas modestas, humildísimas, recargadas, de mensajero de policía, por ejemplo, en la edad que otros dedican á las buenas comodidades de la vida?

Creo que hay la profunda equidad de por medio, para que aquel que empieza á trabajar de quince años, por exceso de necesidades, tenga adquirido su derecho al retiro al amparo de esta ley, con igual medida que el que empieza á trabajar á los diez y ocho años.

He dicho. (*Aplausos*).

Sr. Gómez—Pido la palabra.

Señor presidente: Lamento que se traiga á la discusión del parlamento esta cuestión respecto á la edad en una ley de jubilaciones...

Sr. Argerich—No es posible lamentarlo; estamos discutiendo la ley.

Sr. Gómez—Permítame.

... por una persona de las condiciones intelectuales del señor diputado. Eso es simplemente lo que lamentaba.

El señor diputado ha empezado manifestando que el legislador no debe tomar en cuenta la edad al fijar las condiciones en que se puede obtener la jubilación.

No hay, en leyes de esta naturaleza, cuestión más interesante ni que pueda afectar más la existencia misma de una ley de pensiones que la referente á la edad.

Del punto de vista financiero me basta observar al señor diputado que la tabla de probabilidades de duración de la vida humana, es muy distinta según sea la edad de la persona de quien se trate. Así, á los 39 años, por ejemplo, una persona tiene de vida probable 28 años y 9 meses; á los 40 años, 28 años y 2 meses; á los 50 años, 20 años y 9 meses; á los 55 años, 17 años y 4 meses.

¿Cómo va á ser indiferente para la caja nacional de pensiones pagar una jubilación durante 20 años, que pagarla durante 15, durante 12? ¿Cómo es posible hacer cálculos serios sobre el futuro, sobre el porvenir financiero de la caja, si no se fija la edad?

Esto no se puede discutir, señor presidente.

Al fin y al cabo, esta es una institución que en realidad no es más que una caja de seguros mutuos para los empleados de la administración.

Sr. Argerich—Aumente los años de servicio.

Sr. Gómez—Permítame, señor diputado; yo no lo he interrumpido.

Sr. Argerich—Le pido disculpas.

Sr. Gómez—Ya lo expuse cuando informé en general; no hay nada más inmoral que una ley de montepío sin base de edad: sería reproducir en este país el espectáculo realmente bochornoso de ver que gente joven, con aptitudes para el trabajo, está viviendo a costa de los sudores del pueblo.

La jubilación se da—es el concepto científico—á las personas que no se encuentran habilitadas para el trabajo, por una inhabilidad presunta por la ley, por razón de la edad ó por una inutilidad real ocasionada por enfermedad. Para lo primero, para la inutilidad presunta por la ley, existe la jubilación ordinaria; para lo segundo, para la inutilización causada por el servicio, la jubilación extraordinaria.

No me quiero extender mucho en cada una de estas cuestiones, que se prestarían á un gran desenvolvimiento, por no fatigar la atención de la honorable cámara y porque creo que los señores diputados que han seguido con atención este debate están ya empapados en él.

Por otra parte, no se puede decir en un parlamento que la legislación no debe ocuparse de la edad de los empleados cuando se trata de dictar una ley de jubilaciones, porque no ha habido ningún parlamento del mundo en que discutiendo sobre estas cosas no haya quedado establecida esta prescripción; y la prueba es que Inglaterra, cuando dictó su ley de pensiones, estableció una edad superior á la que marca el proyecto. Lo mismo han hecho Italia, Suiza, Austria Hungría, los Países Bajos, España, Francia, Bélgica y Alemania.

Sr. Lacasa—Pero viven más allí.

Sr. Gómez—Tengo aquí el censo de los jubilados publicado hace años por el señor Latzina con arreglo á la ley anterior, que no establecía edad, y voy á nombrar á algunas de las personas que están aquí designadas, porque es el mejor argumento para que la cámara y la opinión se convenzan que es imposible sancionar una ley sin base de edad.

El señor doctor don Julián L. Agui-

rrre se jubiló en 1892, á los 45 años de edad, con 800 pesos de sueldo; don Eduardo Anido, en 1890, á los 47 años, con 480 pesos; don Luis F. Aráoz, en 1892, á los 49 años, con 560 pesos; don Félix A. Benítez, en 1886, á los 46 años, con 650 pesos; don Martín Bustos, en 1892, á los 47 años, con 800 pesos; don Manuel Caro, en 1889, á los 32 años, como comisario de policía, con 255 pesos; don Antonio Carozzi, archivero general de la administración en 1890 á los 41 años, con 400 pesos; don Baldomero Cernadas, comisario de policía, en 1889, á los 45 años, con 280 pesos; don Manuel Cigorraga, en 1893, á los 40 años, con 396 pesos; don Eduardo Corrales, en 1890, á los 37 años, con 255 pesos; don Jorge Damianovich, en 1890, á los 50 años, con 800 pesos; don José del Valle, en 1891, á los 46 años, con 255 pesos; don Agustín Dillon, en 1893, á los 47 años, con 400 pesos, (está prestando servicios en Santa Fe); don José García Fernández, en 1888, á los 42 años, con 180 pesos; Justo P. Ortiz, en 1892, á los 41 años, con 800 pesos; Ramón Pizarro el 93, á los 42 años, con 800 pesos. Y así sigue la lista de jubilados sin límite de edad.

Sr. Lagos—Es una revelación.

Sr. Gómez—Esto por lo que respecta á lo ocurrido con la ley anterior, que no establecía límite de edad. En cambio no se hubieran jubilado si esa ley hubiera establecido un límite de edad, aunque tuvieran los años de servicios.

Pero respecto de los empleados actuales con largos años de servicios, que son precisamente los que están moviendo la opinión de los empleados jóvenes que no se dan cuenta de sus verdaderos intereses para el porvenir, voy á decir lo que ocurre. Me voy á referir á dos de las administraciones cuyos empleados más han movido la opinión á fin de que esta ley sea sancionada sin el requisito de la edad, para poder jubilarse ellos.

En el correo tienen treinta años de servicio: don José S. Gutiérrez, con 42 años de edad.

Sr. Luro—Se podría omitir los nombres...

Sr. Gómez—¡Nó, señor!...

Sr. Argerich—Ese empleado habría tenido que empezar á los doce años para poder jubilarse.

Sr. Lacasa—No creo que debe interrumpirse esa lista de nombres, porque muchas veces es un honor citar empleados en esas condiciones.

Sr. Gómez—Don Mariano Medrano, de 44 años; don M. Pintos, de 46; don Francisco Sotomayor, de 46; don Salvador Jiménez, de 45; don Eduardo Barceló, de 47. Así hay 17 empleados que se jubilarían con 49 años y menos de edad.

En la contaduría nacional tenían 30 años de servicios: don Julio Belín Sarmiento á los 47 años de edad, y gana un sueldo de 850 pesos; don F. Uriburu, á los 50 años de edad y 850 pesos de sueldo; el señor A. Hansen, con 44 años de edad y sueldo de 550 pesos; el señor Fernando Pineda, de 53 años de edad y sueldo de 350 pesos; el señor Enrique González, con 50 años de edad y sueldo de 350 pesos.

Voy á seguir enumerando.

Tendrán 30 años de servicios á los 48 de edad, el secretario de la contaduría, don Juan D. Rubio, con 500 pesos; lo mismo que el contador don Jorge L. Cortínez; don Pedro C. Burse á los 51 años, con 500 pesos; don Isaac Melián Martí lo mismo; don Juan M. Amenábar, á los 47 años, con 700 pesos; don Alberto Leguizamón, á los 45 años, con 350 pesos; don Francisco Durán, á los 48, con 350 pesos; don A. P. Jiménez á los 52, con 300; don E. Thwaites, á los 50, con 300; don E. Batilana, á los 49, con 300; don C. Brenna, á los 50, con 250; don H. Martín, á los 51, con 250; don C. I. Lezica, á los 44, con 250; don Baldomero J. Monsalve á los 48 años, con 250; don Augusto B. Castellanos, á los 49, con 250; don Ramón C. Femor, á los 49, con 250; don Abel de la Serna, á los 52, con 250; don Abraham Flores á los 44, con 250, etcétera, etcétera.

Y así, señor presidente, no es posible que un parlamento ilustrado pueda sancionar una ley de esta naturaleza, para que se repitan estos hechos. No es posible hacer ningún cálculo financiero, no es moral, en fin, no creo ni que se pueda discutir con seriedad este punto, sin establecer como un requisito esencial, un límite fijo de edad: 45, 50 ó 60 años, lo que crean conveniente los señores diputados, pero es imposible sancionar la ley con la previsión que ella requiere, sin establecer un límite. (*Muy bien!*)

Sr. Argerich—Pido la palabra.

Lo que no me parece moral, ante todo, es que al que trabaja se le rebaje por igual, sea cualquiera la edad que tenga, y en seguida no se le compute esa rebaja.

Me parece que si á un empleado de

una edad determinada se le descuenta del sueldo un tanto por ciento, como se hace invariablemente con todos los demás de la administración, ó se le descuenta para que le sirva como á los demás ó no se les descuenta. Esta es una cuestión de absoluta equidad, de absoluta verdad.

Los argumentos impresionantes que ha hecho el señor diputado por Santa Fe con relación á la primera parte de su exposición, demuestran que si el año 900 no hubiéramos derogado aquella ley de jubilaciones monstruosa, en cuya virtud se pudieron conceder todas las que se concedieron por aquellos dobles cómputos que la ley establecía...

Sr. Gómez—Pero el señor diputado votó la reforma.

Sr. Argerich—La voté. ¡Cómo no! **Sr. Gómez**—Estableciendo sesenta años de edad.

Sr. Argerich—Sí, señor. Y si el señor diputado propone que se aumenten los años de servicios, yo lo acompañaré sin dificultad de ninguna clase; pero lo que yo quiero establecer es la efectividad del servicio prestado y no la determinación de edad que por esta ley se hace.

Esos argumentos no son aplicables á casos como el presente, y en realidad el único argumento atendible de todos los aducidos por el señor diputado por Santa Fe, es el que se refiere á las legislaciones de países extranjeros, que tienen precisamente lo que á nosotros nos falta, que tienen su ley de sueldos, que tienen su ley de empleos, donde el ascenso constituye la base esencial de la carrera administrativa, cosa que no pasa aquí entre nosotros; la aptitud especial para entrar, las condiciones de examen, las condiciones necesarias para la provisión del empleo público en aquellos países, es una cosa completamente distinta de lo que es la provisión del empleo público en nuestro país. Así es que argumentos referentes á leyes de jubilaciones extrañas, á precedentes extranjeros, que no son de aplicación á nuestro país porque nos faltan precisamente todos los elementos necesarios para que se pueda establecer comparaciones posibles entre un sistema de provisión de empleos y nuestro sistema de provisión de los mismos, no son oportunos.

Yo habría querido que el señor diputado por Santa Fe me hubiese dado la razón de equidad en cuya virtud á

un hombre joven se le excluye porque otros empezaron á trabajar ya más entrados en edad, porque han tenido mayores comodidades en la vida.

Esta es la parte concreta, la parte específica de toda la argumentación. Esta es una ley en que el precepto tal cual se establece constituye una injusticia notoria.

Si el señor miembro informante de la comisión quiere evitar que algunas de las personas que estarían en condiciones de jubilarse por haber empezado á trabajar temprano se jubilen, aumente los años de servicios, prevenga por ese camino ese peligro posible, pero de ninguna manera establezca una injusticia en la ley, que no puede ser aceptada en ninguna forma.

Sr. Gómez—Pido la palabra.

Yo no entiendo bien, señor presidente, el argumento que hace el señor diputado, cuando dice que esta ley prohíbe que se computen los años de servicios de un empleado, salvo que se refiera al artículo 26, que no está en discusión todavía.

El artículo 26 establece que no se computarán los servicios prestados antes de 18 años.

De manera que el precepto general es que se computen todos los años de servicio para tenerse en cuenta la cuota de jubilación.

Pero hay este argumento que es fundamental y sobre el cual no me detuve porque no quería hacer una discusión amplia sobre esto: los que se beneficiarán más inmediatamente con la proposición del señor diputado, serán precisamente los empleados que ya tienen muchos años de servicio, los que no han casi contribuido á formar el fondo de la caja, es decir, los que tienen treinta años de servicios y que han contribuido simplemente con el descuento durante dos años; y los empleados que hayan contribuido á formarlo durante treinta años, se verían expuestos á que cuando tuvieran que jubilarse, los fondos de la caja hubieran desaparecido en beneficio precisamente de aquellos que no han contribuido con nada. Si las previsiones de la comisión no resultaran exactas más tarde y esta ley fuera demasiado restrictiva, el congreso siempre estará en condiciones de modificarla haciéndola menos exigente en lo que se refiere á años de servicios ó de edad ó aumentando la cuota de jubilación ó de de pensión. Pero esto sucederá cuando

la experiencia haya dado la razón á aquellos que creen que esta ley es demasiado exigente; pero en el momento actual ¿de qué se van á quejar? ¿de qué se establezca un límite de edad cuando se les va á dar 500 ó 600 veces más que lo que las compañías de seguros les darían?

Hay, para demostrar los beneficios de esta ley, un caso típico.

Un alto magistrado judicial, muy distinguido, amigo personal mío . . .

Sr. Iriondo—Nómbrelo.

Sr. Gómez—El señor juez federal doctor Urdinarrain,—tengo autorización para nombrarlo,—me consultó si tenía ventaja en acogerse á la ley en estudio, habiendo ingresado á los cuarenta y dos años á la magistratura y no teniendo actualmente más que ocho años de servicios. Llevé el caso á una compañía de seguros y aquí está su respuesta. ¿Cuánto cobraría una compañía de seguros mensualmente durante catorce años para pagar á una persona que entonces tenga sesenta y dos años de edad una renta vitalicia de 600 pesos al mes, más á su muerte una pensión á la familia de 300 pesos mensuales durante quince años?

El doctor Urdinarrain podría jubilarse á los sesenta y dos años de edad con arreglo á las prescripciones de esta ley. La renta vitalicia representa á su entrada un capital de 64,223 pesos que pagados en mensualidades por catorce años requiere una mensualidad de 244,65 pesos. Una pensión para la familia representa un capital de 36,012 y 142,85 de prima mensual; lo que hace un total de 397,50 por mes, que tendría que pagar el doctor Urdinarrain para jubilarse á los sesenta y dos años con seiscientos pesos y transmitir á su muerte un derecho de pensión á su familia. ¿Cuánto tiene que pagar ahora? El cinco por ciento sobre un sueldo de mil cien pesos ó sea una mensualidad de cincuenta y cinco pesos.

Véase si esta ley no es una ley de excesiva generosidad para todos los empleados. Y es un caso extremo el que un empleado se incorpore á la administración á los cuarenta y dos años de edad.

La nación no puede sancionar una ley más generosa. No hay en ninguna parte del mundo una ley tan liberal. Si se fuera más lejos, ya se dictaría una ley de beneficencia, una ley de hulgazanería.

Sr. Argerich—No puede sostenerse

que sea una ley de holgazanería cuando se trata de retribuir el trabajo efectivamente prestado.

Sr. Gómez—Es holgazanería vivir á los cuarenta años sin trabajar y á costa del estado.

Sr. Argerich—No es ley de holgazanería. Será la ley más liberal del mundo entero; pero no con relación á estos que empiezan á trabajar desde muy jóvenes.

Sr. Gómez—En las demás leyes se fija un límite de edad mucho mayor.

Sr. Ugarriza—Pido la palabra.

Lo que hace difícil la discusión de esta ley es que se supone que sea vergonzoso ser jubilado. Una ley de montepío civil es una ley comunista. El mismo carácter tienen las jubilaciones que cualquier otra renta ó retribución de servicios prestados, y si entramos á clasificar las rentas que se obtienen por este medio sería preciso concluir que hay personas que son indignas. De manera que un joven que se dedica á ser empleado sería un proyecto de holgazán, que desempeña una ocupación indigna. Y no podemos basar en esto el gobierno, porque el empleo de las rentas en el pago de los empleados es la retribución de servicios justos y meritorios. Esta renta, pues, no tiene por qué envidiar á cualquiera otra de la industria ó del comercio.

Yo no puedo aceptar la fijación de la edad con el criterio de la comisión porque sería lo mismo que suponer que un hombre joven porque tiene millones es un holgazán.

Sr. Barroetaveña—¿No recibe sueldo sin trabajar!

Sr. Presidente—Se votará el artículo en discusión.

—Votado por partes, se aprueba el artículo 18.

—En discusión el 19.

Sr. Martínez (J. A.)—Pido la palabra.

Es para pedir explicaciones al señor miembro informante sobre la última parte de este artículo, que dice:

«La jubilación extraordinaria se acordará al empleado que después de cumplir veinte años de servicios fuese declarado por enfermedad resultantes del ejercicio de las funciones, física ó intelectualmente imposibilitado para continuar en el ejercicio de su empleo, y al que, cualquiera que fuese el tiempo, de

servicios prestados, se inutilizase física ó intelectualmente en un acto del servicio y por causa evidente y exclusivamente imputable al mismo».

Esta palabra *mismo* se refiere al servicio ó al empleado?

Sr. Gómez—Al servicio.

Es lo que los franceses llaman un acto de *dévouement*. Un acto de abnegación, por ejemplo, de un vigilante ó de un bombero.

Sr. Martínez (J. A.)—Perfectamente.

—Se da por aprobado el artículo en discusión, como asimismo el 20.

—En discusión el 21.

Sr. Orma—Pido la palabra.

Antes de pasar adelante voy á permitirme hacer una pregunta á la comisión sobre un artículo ya votado. Me refiero al 15, que dice: «Decláranse inembargables los bienes de la caja nacional establecidos por la presente ley».

Desearía saber qué alcance da la comisión á esta disposición.

Sr. Luro—Habría que hacer previamente moción de reconsideración.

Sr. Orma—No, señor; porque si se me diera una explicación satisfactoria no habría necesidad.

Sr. Luro—Perfectamente; pero yo lo digo por el peligro que esto podría envolver más tarde si algún otro señor diputado quisiera volver sobre el artículo segundo ó tercero, etcétera.

Por otra parte, yo votaré la moción de reconsideración con el mayor placer.

Sr. Gómez—Estos bienes son de propiedad exclusiva de los empleados y están destinados á cubrir las jubilaciones y pensiones; y este artículo es para que los jueces no puedan disponer en forma alguna de estos fondos.

Sr. Orma—Yo haría moción, entonces, de reconsideración, porque me parece que hay una contradicción entre lo que informa actualmente la comisión y una disposición anterior.

Hago, pues, moción de reconsideración del artículo 15.

—Se vota esta moción, y es aprobada.

Sr. Presidente—Se reabre la discusión sobre el artículo 15.

Sr. Orma—Desearía oír una explicación de la comisión á este respecto, porque no me doy cuenta exacta de lo que dice este artículo. ¿Es la suma que

cada empleado tenga como pensión; ó qué es este fondo?

Sr. Gómez—Es todo lo que forma el fondo de la caja.

Lo único que puede embargarse es la cuarta parte de la jubilación ó de la pensión que se está pagando á un empleado determinado; pero el fondo de la caja es inembargable.

Sr. Orma—Perfectamente; el artículo 55 del proyecto legisla sobre la cuarta parte del sueldo de cada empleado, y es una disposición que coincide con otra del código de procedimientos. De manera que aquí debe entenderse que es el fondo general de la caja nacional el que no puede ser embargado.

Ahora yo le pregunto á la comisión, ¿quién podría embargar ese fondo?

Sr. Gómez—¡Ah!, no sé.

Sr. Orma—Nó; es que nadie puede embargarlo, y esta es una disposición inútil en la ley, puesto que siendo este un fondo del estado...

Sr. Gómez—No es del estado, es de los empleados. El estado no puede apoderarse de esos fondos.

Sr. Barroetaveña — Pido la palabra.

El alcance del artículo que se observa es declarar inembargable los bienes de la caja nacional establecidos por la presente ley.

El señor diputado pregunta á qué fondo se refiere. Seguramente es al 5 por ciento aportado por cada empleado como descuento de su sueldo. Esos fondos, como se dice en el artículo 1.º, pertenecen al cuerpo general de empleados de la nación, aunque sean de la caja.

Mañana podría suceder que esos fondos fuesen denunciados por el acreedor de un empleado como bienes del mismo, y entonces el juez, en una ejecución, en una sentencia condenatoria, decretar el embargo del 5 por ciento que hubiera aportado el empleado á la caja, y es ese fondo el que se declara inembargable, no la jubilación.

Sr. Orma—Bien, señor presidente; de todas maneras, me doy cuenta ahora del alcance de la disposición, pero me parece que el texto no está suficientemente claro por esta razón: hasta que el empleado tenga el 5 por ciento en su poder, no hay caso; esto se refiere únicamente á cuando esté dentro de la caja...

Sr. Gómez—Sí, pues.

Sr. Orma—Y entonces, no es propiamente del empleado, es de la caja; y aunque se diga en la ley que este fondo pertenece á los empleados, es indudable que se trata de un bien de carácter público, porque por eso legislamos sobre él, por eso le nombramos una administración y tomamos todas las medidas necesarias para que no quede en poder de los empleados. Si fuera una propiedad absoluta de los mismos empleados, administrada por ellos, podrían hacer con este fondo lo que les pareciera bien.

Sr. Gómez—Pero el señor diputado cree que es perjudicial la existencia de este artículo?

Sr. Orma—Creo que es inútil.

Sr. Gómez—La comisión cree que debe subsistir.

Sr. Vivanco (P.)—Lo que abunda no daña.

Sr. Presidente—El señor diputado por la capital ¿requiere una votación especial sobre este artículo?

Sr. Orma—No insisto, porque veo que el espíritu de la cámara es favorable al artículo; pero me permito quedar convencido de que es un artículo inútil.

—Se dan por aprobados los artículos 22, 23 y 24.

—En discusión el 25.

Sr. Argerich—Pido la palabra.

Voy á oponerme á la segunda parte de este artículo.

No veo razón ninguna para establecer la diferencia que hay entre la primera parte y la segunda.

Es, por otra parte, una preceptuación injusta como deriva de los términos mismos del artículo.

Sr. Gómez—Pido la palabra.

La comisión, señor presidente, ha considerado que no puede reputarse en las mismas condiciones á los empleados cuyos emolumentos figuran en el presupuesto de la nación, que son fijados por el honorable congreso, que á los que, como los empleados del Banco de la nación, del hipotecario ó de otras instituciones análogas, tienen sus sueldos fijados por los directorios de los bancos, sin intervención del congreso.

Voy á dar este dato que me parece va á satisfacer al señor diputado por la capital.

El sueldo medio mensual de las 22.667 empleados civiles de la nación es de 100 pesos 41 centavos. El sueldo medio de los 534 empleados del Banco de la nación es de 344 pesos 61 centavos; es

decir, más de tres veces mayor que el de los empleados civiles.

Si á los empleados civiles se les exige cinco años, como término medio, para computar el último sueldo, es muy justo que á los empleados del Banco de la nación se les compute siquiera el doble, puesto que el sueldo es tres veces mayor.

Si bien es cierto que contribuyen también en proporción, como lo he demostrado en mi informe en general, el 5 por ciento es apenas una mínima parte de lo que se necesita para atender el servicio de las jubilaciones. Está demostrado matemáticamente que sería necesario un descuento de 23 y pico por ciento para poder atender al servicio de esta ley.

Todas las compañías de ferrocarriles franceses para atender el servicio de pensiones y jubilaciones de sus empleados, todas absolutamente han tenido que modificar sus estatutos estableciendo mayor edad, elevando el descuento de los sueldos y requiriendo condiciones más onerosas que las que establece esta ley, para no verse en el caso de tener que cerrar las cajas.

Es esta la razón que la comisión ha tenido para proyectar el artículo objetado.

Sr. Argerich—Pido la palabra.

Me parece que se trata de una cuestión sumamente fundamental. Creo que el porcentaje que establece el señor diputado por Santa Fe, tomando en cuenta todos los sueldos de la administración, entre los que figuran los de vigilantes, bomberos y otros empleados inferiores, no puede de ninguna manera traer como consecuencia un argumento de equidad para resolver esta cuestión.

La cuestión esencial es esta: los empleados del Banco de la nación argentina, por ejemplo, que es á los que se ha referido el señor diputado por Santa Fe...

Sr. Gómez—Y del Banco hipotecario.

Sr. Argerich—Y también, los del Banco hipotecario, contribuirían proporcionalmente al fondo del montepío, como los empleados de la administración. Si un empleado de la administración tuviese un sueldo que tiene un empleado del Banco de la nación, vendría á encontrarse en las mismas condiciones suprimiendo este artículo. Habría la misma proporción entre la contribución mensual sobre el monto del

sueldo. No es esa observación, pues, un argumento en contra de lo que yo propongo.

Después, por datos que he recogido, resulta que los empleados del Banco de la nación son de distinta categoría, algunos con largos servicios; de manera que creo que al señor diputado por Santa Fe se le ha presentado la demostración numérica de cómo sufrirían un perjuicio evidente esos empleados. El señor diputado ha visto cómo empleados de ese establecimiento con largos servicios, de mucha responsabilidad, retribuidos un poco mejor, por razones que no es del caso mencionar, pero que no se podría demostrar que están bien retribuidos por el presupuesto, vendrían á quedar en condiciones completamente injustas.

Yo creo que no debe votarse esta parte del artículo.

Sr. Gómez—Efectivamente, he sido visto por alguno de los altos empleados del Banco de la nación, como lo he sido por todos los empleados superiores que se interesaban con insistencia en que se legislara sobre casos particulares, para salvar su situación personal, no este año sino el año pasado. Me parece que uno de ellos fué el señor tesorero del Banco de la nación, que se va á jubilar con mil pesos inmediatamente si no se fija límite de edad, y que naturalmente estaba interesado en que no se sancionara este artículo en la primitiva forma en que la comisión lo despachó, porque el primer despacho de la comisión establecía que á los empleados cuyo sueldo no fuese fijado por el congreso se les computaría como término medio de sueldo el de todos los años en que hubieran desempeñado sus funciones. Contra ese artículo protestaron los empleados del banco, y por eso es que la comisión de legislación estudió el caso, observó la demostración numérica que trajeron esos empleados, y encontró justificado el reclamo, pues computándose los treinta años como término medio resultaba realmente que el empleado que hoy goza de mil pesos de sueldo y había empezado ganando 25 ó 30, se jubilaría con una suma exigua. Pero los mismos empleados que creían que el término de treinta años era absurdo, aceptaron el de diez años, que no los perjudica mayormente.

Por eso la comisión lo propone.

Sr. Argerich—Pido la palabra.

Me parece que no se necesita hacer

una demostración de cifras. Basta tomar la cuestión tal cual está planteada en los dos incisos del artículo 25.

No es posible que á un empleado público le resulte igual que se tome el promedio de los últimos cinco años de servicios que el de los últimos diez años. Me parece que es el caso estricto de aplicar el mismo tiempo á todos, por la razón fundamental de que cuanto mayor sea el sueldo del empleado de la administración tanto mayor es la contribución que da al fondo de la caja del montepío.

Supongamos por un momento que en vez de ser empleado del Banco de la nación uno de esos que ganan mil pesos, fuese empleado de la administración general; toda la argumentación que hace la comisión caería por su propio peso, porque rebajándole el 5 por ciento, no se tendría en cuenta lo que gana, sino lo que se le rebaja.

Sr. González Bonorino — Que se vote por partes.

Sr. Presidente — La primera parte se ~~ha~~ por aprobada; de manera que sólo debe votarse la segunda observada por el señor diputado por la capital.

- Se vota y resulta afirmativa.

- En discusión el artículo 26.

Sr. Gómez — Pido la palabra.

Para proponer el siguiente agregado á este artículo: «salvo para los que desde su incorporación al servicio con esa edad, hayan sufrido el descuento del 5 por ciento en su sueldo».

El artículo establecía que no se computarían los servicios prestados antes de los diez y ocho años de edad, porque hay muchos empleados que han empezado á prestarlos á los 12 ó 14 años. La comisión cree que es equitativo que se les compute todo el tiempo que hayan prestado sus servicios á los que hayan sufrido el descuento del 5 por ciento en las condiciones establecidas en el agregado que propone.

Sr. Salas — Pido la palabra.

Yo era partidario también de este artículo antes de que se adoptara el que establece el límite de la edad. Habiéndose establecido ya la edad mínima para la jubilación, me parece que está de más y que no lo debemos sancionar, porque, como lo ha dicho muy bien el señor diputado Argerich, sería una injusticia manifiesta no computar los años de servicios prestados por un empleado

en su juventud, toda vez que se establece un número de años para obtener la jubilación.

De manera que la salvedad que propone la comisión debe ampliarse hasta la supresión total del artículo, que ya no tiene razón de ser.

En ese sentido hago moción.

Sr. Gómez — Pido la palabra.

El señor diputado, que formó parte de la comisión de legislación y que firmó con todos nosotros el dictamen, no hizo, me parece, en el seno de la comisión, ninguna observación á este artículo.

Por otra parte, yo que conozco muy bien el mecanismo de esta ley porque la he estudiado detenidamente, sostengo que el artículo es muy útil en ella.

Hay cientos de empleados que se perjudicarían si se sancionara este artículo en la forma que está, y que se beneficiarían para la jubilación extraordinaria, si fuera suprimido de la ley.

Por eso la comisión se ha puesto en un término medio: á los que contribuyan desde los diez y ocho años con el cinco por ciento de descuento, muy bien, que se les compute ese tiempo, pero á los que no hayan contribuido, no.

La cámara debe tener presente que cuando se sancionó la ley francesa del año 53 se estableció un artículo en virtud del cual nadie tendría derecho á la jubilación sin haber contribuido durante treinta años con el cinco por ciento de descuento, que es lo que realmente debiéramos hacer nosotros, para dar una ley de justicia, y sobre todo una ley que fuese una garantía para el porvenir.

De las listas que tengo aquí de los empleados de correos y de la policía resulta que hay más de 300 ó 400 que han empezado á servir á los doce ó catorce años, de manera que en lugar de computárseles veinte años de servicio para la jubilación, habría que reconocerles treinta más ó menos, y por consiguiente, la responsabilidad y los desembolsos de la caja serían mucho mayores.

Todo lo que sea cuidar el fondo de la caja, es beneficiar á los empleados. Esto es de lo que yo quiero que todo el mundo se persuada. Yo no defiendo el tesoro, sino el porvenir de los empleados y el de sus familias, que los que protestan contra la ley están comprometiendo inconscientemente.

Sr. Salas — Pido la palabra.

Yo no he sido visto por ningún empleado: debo declararlo á la cámara.

He dicho que me llama la atención

el hecho de que habiéndose fijado un límite de edad para los jubilados, se establezca todavía un minimum de edad para empezar á regir el cómputo de los años de servicio, tanto más que de la explicación del señor miembro informante de la comisión resulta que los únicos casos en que los empleados saldrán beneficiados con este cómputo de edad de los 18 años arriba, serán los de aquellos que se hagan acreedores á la jubilación extraordinaria, es decir, para aquellos casos en que los empleados se hayan enfermado ó contraído tales dolencias que les impida en absoluto continuar en sus funciones por haber quedado completamente inutilizados.

Me parece que es muy justo que si un individuo se ha inutilizado al año ó dos años de servicio, la caja del montepío le dé la retribución de esos servicios, puesto que el mismo servicio ha sido la causa de su inutilización.

De manera que si la moción mía tiende á evitar una injusticia para con esos empleados inutilizados en el servicio, insisto una vez más en que debe suprimirse el artículo.

—Se vota el artículo en discusión con el agregado propuesto por el miembro informante de la comisión, y es aprobado.

—Se aprueban los artículos 27 á 33 inclusive.

—En discusión el 34.

Sr. Argerich—Pido la palabra.

Este artículo me obliga á pedir una explicación al señor miembro informante.

Habla de reducción del 10 por ciento á todas las jubilaciones concedidas; es decir, que además de las reducciones que se han hecho por leyes anteriores esto importa una nueva reducción?

Sr. Gómez—Sí, señor.

Sr. Argerich—Eso no es justo; importa una revisión á los actos anteriores del congreso, cuando ha concedido jubilaciones constituidas al amparo de todas las leyes anteriores.

Sr. Gómez—Pido la palabra.

Voy á dar la razón de esta disposición al señor diputado y desearía que la cámara me escuchara para que se convenciera de la justicia con que la comisión ha propuesto la reducción del 10 por ciento.

No hay ninguna ley actualmente que determine el derecho que tienen los he-

rederos de los actualmente jubilados á una pensión.

Esta ley establece, en su capítulo IV, me parece, que los herederos de los actuales jubilados tienen derecho á una pensión de una parte de la jubilación actual. De modo que es para pagar una parte de la pensión que se va á conceder á la familia de los actualmente jubilados, que la comisión propone la reducción del 10 por ciento.

Está calculado que el término medio de la vida de los actuales jubilados es de 13 años; el 10 por ciento que se les va á descontar no alcanzará absolutamente para cubrir el importe de las pensiones que corresponde á sus herederos.

De modo que es una nueva generosidad de la ley. Debe aceptarse el artículo.

Sr. Argerich—Voy á votar en contra, porque es una injusticia de la ley.

—Se aprueban los artículos 34 á 40 inclusive.

—En discusión el artículo 41.

Sr. Lacasa—Pido la palabra.

Desearía saber del señor miembro informante si en el caso de faltar un empleado después de haber contribuido á formar la caja durante veintinueve años la viuda é hijos menores perderán su derecho á la pensión.

Sr. Gómez—Si no tiene derecho á jubilación no transmite derecho á pensión.

Sr. Lacasa—¿Aunque sólo le falte un año?

Sr. Gómez—Pueden acogerse á la disposición del artículo 51, que dice:

«Las personas designadas en el artículo 42 tendrán derecho á que se les liquide el importe de un mes del último sueldo del empleado fallecido sin dejar derecho á pensión, por cada cuatro años que éste hubiera contribuido á la formación del fondo de la caja nacional.»

Sr. Lacasa—Me parece que es demasiado estricto lo que propone la comisión y un aprovechamiento injusto de los fondos con que el empleado ha contribuido á la formación de la caja.

Yo voy á proponer que á las familias de los empleados que fallezcan teniendo más de veinte años de servicios se les acuerde una pensión de la mitad de lo que les correspondería si aquellos hubieran completado los treinta años.

Se trata de auxiliar á los empleados

y sus familias con una ley de montepío, y en las razones que he escuchado no se ha hecho otra cosa que comparar la remuneración con las cajas de ahorro y con las compañías de seguros. La comparación no es exacta, porque esas sociedades se forman para ganar los que las establecen, mientras que aquí estamos discutiendo una ley para que los empleados tengan un fondo de retiro, que ellos mismos van á formar.

No se le puede exigir á un empleado que durante veintinueve años contribuya á formar el fondo de la caja y después no acordarle ningún derecho.

Sr. Gómez—El proyecto les acuerda un derecho. De manera que estando el señor diputado conforme con el principio podría reservar su proposición para cuando se discuta el artículo 51.

—Se aprueban los artículos 41 al 50 inclusive.

—En discusión el 51.

Sr. Lacasa—Aquí viene mi observación...

Sr. Gómez — ¿Me permite el señor diputado?

Este artículo fué introducido al estudio de la comisión cuando formaba parte de la misma el señor diputado por la capital doctor Argerich.

Yo manifesté en la comisión que no estaba absolutamente conforme con que se diera á la familia de los fallecidos en estas condiciones un mes de sueldo por cada cuatro años de servicios.

Entiendo, señor presidente, que esta es una modificación muy peligrosa introducida por la comisión. La base principal de esta ley está en la mutualidad.

Por este artículo 51 se devuelve á los empleados casi el 50 por ciento de lo que han invertido en la formación del fondo de la caja. Yo había aceptado que, por cada ocho años de servicio, se le diera un mes de sueldo.

Así, pues, salvo mi responsabilidad sobre esta disposición que encuentro inconveniente.

Sr. Lacasa—Desearía saber la opinión de la comisión respecto á lo que yo había propuesto.

Sr. Gigena—El artículo responde á lo que ha propuesto el señor diputado. Devuelve la mitad de lo que ha abonado.

Sr. Lacasa—Yo pienso como el señor diputado, que este artículo es contrario á la índole de esta ley, y entonces, más bien prefiero que se asigne

aunque sea la tercera parte á los que hubieren prestado más de veinte años de servicios.

Sr. Gómez—¿Pero el caso del señor diputado es que, dado el fallecimiento de un juez, la familia tendría alrededor de nueve ó diez mil pesos?

Sr. Lacasa—Nó, señor diputado; yo he propuesto la tercera parte de lo que le correspondería si hubiera prestado veinte años de servicios.

Sr. Gómez — ¿Cómo redactaría el artículo el señor diputado?

Sr. Presidente—Sírvase dictar el artículo que propone el señor diputado.

Sr. Lacasa (*dictando*)—Los herederos de los empleados que hubieren prestado...

Sr. Gómez—Nó! Los herederos, nó! Son las viudas, los hijos ó los padres.

Sr. Lacasa—Bien, así: «Las personas á que se refiere el artículo... tendrán derecho á una tercera parte de la pensión cuando su causante hubiera prestado más de veinte años de servicios.»

Sr. Gómez—Y hubiera contribuido durante ellos con el cinco por ciento de descuento.

Sr. Lacasa—La tercera parte de la pensión...

Sr. Gómez — La tercera parte, ¿de qué pensión? Hay que establecerlo.

Sr. Lacasa — De la pensión determinada en la misma ley.

Sr. Luro—Pido la palabra.

No sé cómo piensa el miembro informante de la comisión, pero por las atenuaciones que ha querido establecer dentro del artículo propuesto paréceme que está dispuesto á aceptarlo. Yo quiero salvar mi opinión personal.

Considero que las leyes de montepío son organismos tan perfectamente equilibrados en todas sus disposiciones, que con la menor alteración, aparentemente inocente y sin importancia, se corre el riesgo de hacer fracasar la ley. Sería necesario que se nos demostrase lo que importaría dentro de la ley la incorporación de este artículo, promoviendo la formación de nuevos cálculos. Yo, por mi parte, creo que las observaciones que el señor diputado ha hecho respecto á la justicia de compensar á las personas determinadas en el artículo 2.º cuando se trata de un empleado que ha servido al estado durante veinte años, encontrarían perfectamente su lugar dentro del artículo 51, cuyas disposiciones importan devolver

al empleado el 50 por ciento de las sumas que hubiera entregado á la caja.

Es preciso tener presente que las cajas de pensiones se forman de dos recursos principales: los recursos seguros y los eventuales. Son recursos seguros aquellos formados por el descuento del tanto por ciento de cada sueldo; y son recursos eventuales los que se forman por circunstancias indeterminadas, como, por ejemplo, la renuncia, la destitución ó el fallecimiento antes del término que da derecho á la jubilación.

Todos estos sedimentos son los que forman la gran base del montepío civil en todas partes; y si nosotros empezamos á buscar circunstancias atenuantes, vamos á hacer fracasar esta ley, que ya el mismo miembro informante ha calificado de excepcionalmente generosa; y una ley de montepío excepcionalmente generosa necesita mucho más cuidado todavía para que en un momento dado no llegue á estar por debajo de los compromisos que debe cumplir.

En mérito de estas razones, me adelanto á declarar que votaré en contra del artículo.

Sr. Gómez—Pido la palabra.

El señor diputado por la capital, con el reconocido talento con que siempre trata todas estas cuestiones, ha pronunciado realmente palabras muy verdaderas sobre el fondo de la cuestión.

Pero si yo, señor presidente, he empezado por declarar que no acepto el artículo 51, mal podría estar conforme con la proposición del señor diputado doctor Lacasa que significa mucho más que lo que yo mismo he rechazado propuesto por la comisión.

De modo que voy á votar hasta en contra del artículo 51, porque entiendo que lo justo sería dar un mes de sueldo por cada ocho años de servicios; si nó, distraemos la mitad de los fondos que debían incorporarse á la caja del montepío. De manera que estoy en contra.

Sr. Argerich—Pido la palabra.

Con relación á este artículo coincido en un todo con lo que acaba de manifestar el señor diputado por la capital, y estoy en contra de lo que expresa el señor miembro informante, por razones de estricta equidad.

Yo no podría en este momento dar específicamente todas las razones en cuya virtud fuimos desalojando, en la comisión de legislación, aquellos artículos que podían substituir, diré, á éste, entre los

cuales figuraba, mas ó menos, la forma propuesta por el señor diputado por Buenos Aires.

Cuando este artículo fué presentado á la deliberación de la comisión, creo que por mí, el señor ministro Berduc, que había hecho un estudio detenido de esta ley, formuló oposición á sus términos, opinando que cualquier forma que le diese mayor extensión sería sumamente peligrosa y podría hacer fracasar el propósito de la ley de montepío; y después de un estudio detenido, el mismo señor ministro de hacienda vió que el artículo 51 tal cual estaba concebido, era una fórmula de transacción que, so color de perfecta equidad, no perjudica en nada á la ley; pero cualquier otro precepto parecido al que propone el señor diputado por Buenos Aires, era sumamente peligroso.

El señor ministro de hacienda estudió todas las soluciones posibles que se podían dar á esta cuestión, y llegó á esta solución: ó suprimir el precepto del artículo 51 ó conceder solamente lo que el mismo artículo 51 establece.

Sr. Barroetaveña—Yo le voy á demostrar aritméticamente al señor diputado...

Sr. Argerich—Me alegro de que el señor diputado pueda hacer esa demostración. Yo he querido solamente traer este recuerdo personal del debate de la comisión, hace cuatro años, sin tener á mano los antecedentes del asunto.

Sr. Gómez—Por lo que respecta al señor ministro Berduc, permítame el señor diputado que le recuerde que no solamente estuvo absolutamente en contra de los cuatro, sino aun de los ocho años.

Ese es mi recuerdo personal.

Sr. Argerich—Me parece que ese recuerdo...

Sr. Gómez—Le sería muy fácil al señor diputado verificarlo preguntándolo al exministro señor Berduc, que felizmente vive.

Sr. Argerich—Sería cuestión de dejar este punto en suspenso mientras requiramos ese informe.

Sr. Barroetaveña—Pido la palabra.

Efectivamente, este como varios otros artículos de la ley fué discutido con suma detención en la comisión de legislación, con asistencia muy frecuente del exministro de hacienda señor Berduc. Recuerdo que entonces la mayoría de la comisión, respecto de algunos puntos

capitales de la ley, esenciales para el funcionamiento (difícil y eventual en el futuro, de leyes de esta naturaleza, estaba en contra de las ideas de mi distinguido colega doctor Gómez, que había hecho un estudio profundo del mecanismo de esta ley y de todas sus disposiciones. Era el sabio de la comisión, en la materia. El ministro de hacienda señor Berduc había estudiado también profundamente la cuestión, y después de un largo debate sobre cada uno de estos puntos capitales, se aceptaba una fórmula de transacción.

Ni los miembros de la comisión que deseábamos hacer la ley lo más favorable posible para el cuerpo de empleados, ni el señor ministro de hacienda y el señor doctor Gómez, que deseaban asegurar sobre bases sólidas el porvenir de dicha ley, prevalecieron en sus opiniones. De aquel cambio de ideas surgió esta fórmula conciliatoria. Sería injusto, como decía el señor diputado Lacasa, que la familia de un empleado que ha contribuido durante 29 años á formar el fondo de la caja de pensiones y jubilaciones y que falleciera antes de estar en las condiciones de acogerse á los beneficios de la ley, quedase en la calle sin que el fondo del montepío la auxiliara con algo. Entonces se dijo: ¿qué podría acordar la caja del montepío en este caso? ¿qué forma convendría para aliviar estos primeros momentos la situación angustiosa de una familia pobre de empleado que ha concurrido al fondo? Y de allí se arribó á fijar en el artículo 51, en debate, que se acuerde á la familia un mes de sueldo por cada cuatro años de servicios, y con arreglo al último sueldo.

Vamos ahora á comparar lo que acuerda el artículo 51 y lo que propone el señor diputado Lacasa, para que se aperciba la cámara de la enorme diferencia numérica que hay entre una y otra fórmula, dando razón al juicio claro que ha emitido sobre la materia el señor diputado Luro.

Supongamos que el último sueldo del empleado sea de cien pesos y que ha concurrido durante veintinueve años al fondo del montepío. Acordándole cien pesos por cada cuatro años, vendría á recibir la familia setecientos y tantos pesos, según el artículo 51. Lo que propone el señor diputado Lacasa es que se acuerde una pensión de la tercera parte de la jubilación que habría correspondido.

¿Qué pensión habría correspondido á

la familia de un empleado cuyo último sueldo fuera de cien pesos? Sería la mitad de la jubilación. La jubilación sería ochenta pesos, por ejemplo, para el empleado que hubiera prestado treinta años de servicios y tuviese cincuenta y cinco de edad. La pensión para la familia sería cuarenta pesos; y la tercera parte, sería de veinticinco y pico de pesos mensuales, ó trescientos al año, que durante quince años formarían cuatro mil quinientos pesos, en lugar de los setecientos que acuerda el proyecto.

Véase cómo tiene razón el señor diputado Luro al decir que si se aceptara una modificación en apariencia inocente, se produciría un desequilibrio en la caja.

Quería dar esta explicación para que se vea que este artículo fué una transacción entre los miembros de la comisión y el señor ministro de hacienda y el señor diputado Gómez.

Sr. Gómez—Pido la palabra.

Siento mucho tener que rectificar un recuerdo del señor diputado.

El primer despacho de la comisión fué suscripto el 11 de junio de 1901. Yo lo subscribí junto con él y con los diputados Serú, Félix Avellaneda, Helguera y Santamarina. Decía: tendrán derecho á que se liquide el importe de un mes de sueldo por cada ocho años que hubiera contribuido al fondo. De manera que la transacción fué por los ocho años; y el señor diputado Argerich subscribió en disidencia, aconsejando que se estableciera por cada cuatro años. Ha sido recién en el último despacho del año pasado que la comisión aceptó los cuatro años, cuando intervino el señor diputado Pinedo, presidente de la comisión.

De manera que el exministro señor Berduc no aceptó jamás los cuatro años; y yo insisto en afirmar que es verdaderamente peligroso devolver un mes de sueldo por cada cuatro años.

Sr. Lacasa—Pido la palabra.

Debo manifestar que, no obstante los elogios que se le han tributado al señor diputado Luro, por su argumento en contra del artículo que yo he propuesto, no he encontrado ninguna razón que me demuestre que no es justo ese artículo.

Los señores miembros de la comisión de legislación se parapetan diciendo que sería perjudicial para la ley y para el fondo del montepío establecer lo que yo propongo, que es justo, á mi modo de ver. Pero no se ha contestado mis

observaciones ni se ha tenido en cuenta que la proposición que yo he hecho puede resultar benéfica para la ley.

Las razones que se dan en este caso fueron buenas para dejar sin efecto la ley anterior, en virtud de la cual, como lo ha declarado muy bien el señor miembro informante de la comisión, se cometieron tantos abusos; y habiendo llegado a tal punto las cosas se dictó la ley actual para que nadie pueda jubilarse, y tratándose de este país, se sacaba en cuanto á la edad, el ejemplo de Alemania y de Inglaterra y de otros países donde los hombres viven mucho tiempo y donde empiezan á vivir mucho más tarde... (*Risas*).

Sr. Helguera—Y el señor diputado nos ha contado el caso de un jubilado en la provincia de Buenos Aires que está para ser jubilado en la nación. De modo que le damos la vuelta á los ingleses! (*Risas*).

Sr. Lacasa—Lo que yo digo es que cuando se trata de una ley tan nacional como esta no debemos siempre atendernos á los ejemplos de las naciones extranjeras, en que son tan distintas las condiciones de la vida.

Yo veo que esta ley va á pasar tal como la propone la comisión; pero yo creo que no deben dejarse pasar en silencio estas cuestiones. En estos casos, cuando yo no encuentro justa una proposición, no la acepto; y si propongo una modificación no soy generoso sino que soy justo, porque soy contrario á las generosidades y siempre lo seré tratándose de los dineros públicos; pero también creo que no es posible que á un hombre que durante veintinueve años ha estado contribuyendo á la caja del montepío y que ha prestado buenos servicios al país, pueda desconocerle esos servicios dejando su familia sin derecho á pensión.

Se arguye con la empleomanía; pero este es un argumento mal aplicado aquí, porque ese es un argumento que se debe aplicar en favor del individuo y no en contra. Un hombre que dedica su actividad trabajando durante treinta años en una profesión cualquiera, obtiene siempre los recursos necesarios para asegurarse la subsistencia durante los últimos años de su vida. Mientras tanto, el empleado honrado que durante treinta años ha prestado sus servicios al país, no tiene otra cosa ni más recurso para atender á las necesidades de los últimos años de su vida que los que le acuerde

una ley de esta naturaleza en armonía con la importancia de los servicios prestados, y no como si se tratara, según lo pretenden algunos, de favorecerles con un acto de mera beneficencia.

Yo no pienso de esta manera, y como creo injusto este artículo, votaré en contra; y si fuera la cámara de mi misma opinión, entraría á votarse el que he propuesto.

Sr. Vivanco (P.)—Pido la palabra.

Me parece que el señor diputado que deja la palabra va á estar de acuerdo conmigo y que concluirá por reconocer que lo que él propone es mucho más injusto que lo que propone la comisión.

Él defiende al empleado que haya desempeñado sus funciones durante veintinueve años, y quiere que no se tome en cuenta al empleado cuyas funciones hayan durado diez y nueve años, porque solamente á los veinte años de haber desempeñado el empleo tendrá derecho á la tercera parte de la pensión. De ahí resulta entonces que lo único que hace es disminuir en diez años la injusticia: de veintinueve á diez y nueve años; mientras que el artículo de la comisión no establece esa diferencia. Dice únicamente: «Las personas designadas en el artículo 42 tendrán derecho á que se les liquide el importe de un mes del último sueldo del empleado fallecido sin dejar derecho á pensión, por cada cuatro años que éste hubiera contribuido á la formación del fondo de la caja nacional».

Por esto pienso que el señor diputado tendrá que confesar que es mucho más favorable para el empleado que lo propuesto por él, porque en su caso tendría que tener veintinueve años y ahora no se fija término; basta que haya estado cuatro años.

Sr. Lacasa—El señor diputado...

Sr. Vivanco (P.)—¿Pero qué le parece al señor diputado la observación? (*Risas*).

Sr. Lacasa—Que se voten los dos.

Sr. Vivanco (P.)—Yo creo que el discurso del señor diputado es el mejor fundamento que tiene el artículo 51, y no el que manifiesta.

De manera que por las razones que ha dado, debe votar la cámara el artículo 51, porque es en favor de los empleados.

Sr. Ugarriza—Pido la palabra.

Yo no veo cómo los empleados puedan estar interesados en el porvenir de

la caja. Si desaparece la caja, no por eso deja de gravitar la deuda sobre el empeño del fisco, quien podrá pagarla ó nó pero nunca desconocerla; y si crece la caja, los favorecidos por ella no tienen aumento.

Por consiguiente, el empleado no tiene interés en que la caja aumente ó disminuya.

Veo aquí que el propósito es crear una caja para la cual se cree que los empleados deben sacrificarse para enriquecerla, pero no veo qué interés puedan tener...

Sr. Barroetaveña—Asegurar su retiro y el de su familia.

—Se vota el artículo en discusión y es aprobado, así como los siguientes hasta el 61 inclusive.

—En discusión el 62.

Sr. Gómez—Pido la palabra.

Me parece muy oportuna aquí la indicación del señor diputado Varela Ortiz, pero en el sentido de que los empleados del Banco de la nación, del Banco hipotecario y ferrocarriles estén obligados á entregar al fondo de la caja lo que les corresponda con arreglo al artículo 2.º de esta ley, es decir, que deban depositar el 5 por ciento desde el 1.º de enero de 1901.

De manera que quedaría en esta forma: «Las personas indicadas en el artículo 2.º que se acojan á la presente», etcétera.

—Se aprueba el artículo en la forma indicada.

Sr. Vivanco (P.)—Pido la palabra.

Solamente para hacer una declaración, porque tal vez la cámara pudiera extrañarse más tarde de que mi actitud no responda á la que he asumido en esta discusión.

Yo hubiera hecho algunas observaciones á este proyecto que se está discutiendo; pero con el propósito de que cuanto antes se convierta en ley, porque cualesquiera que sean sus defectos siempre será más ventajosa que la situación actual, he prestado mi voto á todos sus artículos, sin embargo de que comprendo que hay algunas disposiciones que tendrían que ser modificadas tratándose de los maestros de escuela.

Hago la declaración en este momento porque el artículo 1.º de las disposiciones transitorias dice: «El consejo nacional de educación transferirá á la caja

nacional de jubilaciones y pensiones el fondo que haya acumulado para los efectos de la ley número 1909».

Como yo voy á presentar un proyecto de reforma á la ley actual, que tendrá por objeto la separación de las jubilaciones y pensiones de los maestros de las que comprende esta ley, hago la declaración en este momento para que no se extrañe mi actitud posterior.

—En discusión el artículo 63.

Sr. Vivanco (P.)—Pido la palabra.

Este artículo dispone que el poder ejecutivo durante el año 1903 ordenará que se levante un censo de los empleados comprendidos ó que puedan acogerse á los beneficios de la presente ley.

Desearía que al mismo tiempo se hiciera también una revisión de los que actualmente están gozando de pensiones y de jubilaciones. Hoy día no es el caso de que el estado afronte estos gastos con las rentas generales. Ahora es el empleado mismo que contribuye también, y es claro que si hubiera alguna persona que por una omisión, descuido ó favoritismo de las autoridades respectivas estuviera gozando de pensiones ó jubilaciones, no es justo que ahora se disponga de los fondos de propiedad de los empleados en favor de aquellos que no tienen derecho alguno. Por consiguiente, lo que corresponde es encargar á la misma junta administradora de la caja que en cada caso al hacer el pago de la pensión ó de la jubilación verifique si se han cumplido los extremos de las leyes vigentes, para en caso contrario dar cuenta al poder ejecutivo, para que declare cesante al que se encuentre en esas condiciones.

Propongo el artículo en estos términos: «La junta de administración hará la revisión de las pensiones y jubilaciones existentes y dará cuenta al poder ejecutivo de las que encuentre fuera de las prescripciones de las leyes vigentes cuando se concedieron».

No podemos disponer nosotros del dinero ajeno.

Sr. Presidente—Se dará por aprobado el artículo 63.

La cámara resolverá por una votación previa, si trata inmediatamente el nuevo artículo.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente—Está en discusión el artículo propuesto.

Julio 13 de 1903

CÁMARA DE DIPUTADOS

11.ª sesión ordinaria

Si no se hace observación, se dará por aprobado.

Sr. Gómez—Pido la palabra.

Cuando se aprobó por la comisión este proyecto, me parece que los empleados de los ferrocarriles figuraban en el presupuesto general de la nación; pero, después, con arreglo á una ley especial, esos empleados no figuran ya en él...

Sr. Vivanco (P.)—No figuran en el presupuesto.

Sr. Gómez—De manera que habría que agregar un inciso al artículo 2.º

que diga: «el personal de los ferrocarriles de la nación».

Debe ponerse como inciso 6.º del artículo 2.º

—Se vota dicho inciso y resulta aprobado.

—Se aprueba igualmente el artículo 65.

—El 66 es de forma.

Sr. Presidente—Queda levantada la sesión.

—Son las 6 y 15 p. m.